

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Bogotá, D. C., febrero diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022).

REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2022-0089 instaurada por el señor JAIME OCAMPO QUIROGA en contra de FAMISANAR EPS.

ANTECEDENTES

1º.- Petición.-

El señor JAIME OCAMPO QUIROGA ejercita la acción de tutela en nombre propio contra MEDIMAS EPS, con el fin de que se le tutele su derecho fundamental a la salud.

En consecuencia, solicita se le ordene a la entidad accionada agendar de manera inmediata la cita con el anesthesiólogo, para que le puedan autorizar la cirugía.

2º.- Hechos.-

Refiere el accionante en síntesis que se permite efectuar el Despacho, que es de la tercera edad y fue diagnosticado con dos hernias en la parte baja del abdomen.

Indica que fue operado de cáncer en la apéndice, lo cual retraso la cirugía de las hernias.

Denota que ha estado en varias citas médicas pues no se encuentra bien de salud, encontrándose en cama todos los días, pues se le dificulta caminar, al ir al baño le duele al evacuar la orina y no soporta el dolor en las hernias.

Comenta que el cirujano le indicó que las hernias estaban muy protuberantes, ordenándole exámenes previos a la cirugía los cuales ya tiene y solo le falta la cita con el anesthesiólogo.

Alega que la orden está desde el 13 de enero de 2022, pero la EPS accionada le indica que no hay agenda.

3º.- Trámite.-

Corresponde por reparto conocer de la presente acción de tutela a este Juzgado y mediante proveído de fecha febrero catorce (14) del año en curso se admite a trámite la misma y se vinculó oficiosamente a ADRES.

Notificación efectuada a los entes accionados mediante correos electrónicos enviados el día lunes 14 de los cursantes.

FAMISANAR EPS indicó que esa entidad se encuentra realizando todas las gestiones administrativas para materializar los servicios requeridos por el accionante y ordenados por el médico tratante.

Hace saber que esa entidad no ha negado la prestación de los servicios solicitados por el afiliado, por el contrario se encuentra validando y gestionando la autorización y programación de los servicios.

Solicita se le otorgue un tiempo razonable y prudencial, debido a que no es posible suministrar y agotar todos los procedimientos administrativos dentro del tiempo otorgado por el Despacho.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

La seguridad social, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, es considerada un servicio público de carácter obligatorio, que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y se garantiza como un derecho irrenunciable, a todas las personas.

Para el efecto, la Jurisprudencia ha destacado dos momentos en la evolución del concepto de salud como derecho constitucional. En primer lugar, por medio de la acción de tutela era posible proteger derechos de contenido prestacional, como la salud, siempre y cuando tuvieran una conexión con derechos como la vida, integridad personal o mínimo vital o se concretaran en un derecho de naturaleza subjetiva, cuando eran desconocidos servicios incluidos en los diferentes planes de atención en salud.

Después se consideró que la salud es un derecho fundamental autónomo, porque se concreta como una garantía subjetiva o individual derivada de la dignidad humana, teniendo en cuenta que responde a los elementos que le dan sentido al uso de la expresión 'derechos fundamentales', alcance que se le otorga de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano (Art.93 C.P.).

Esta interpretación efectuada por el juez constitucional, dejó de lado el criterio de la conexidad, porque se considera artificioso e innecesario para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales, pues todos los derechos, unos más que otros, tienen definitivamente un componente prestacional, por lo que *"la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud 'en conexidad con el derecho a la vida y la integridad personal', para pasar a proteger el derecho fundamental autónomo a la salud"*.

No obstante lo anterior, La Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, estatuyó de manera definitiva y sin lugar a contemplar de manera jurisprudencial el derecho a la salud como derecho fundamental autónomo, razón por la cual se puede instaurar la acción de tutela para reclamar éste derecho de manera directa sin necesidad de demostrar que con su vulneración se esté afectando el derecho fundamental a la vida, como inicialmente tenía que establecerse por parte del tutelante.

En el mismo sentido la Sentencia T-036/13 señala:

"...En este punto, reitera la Corte que el concepto del galeno a cargo debe primar sobre cualquier argumento de tipo administrativo o limitación normativa, en razón a que es ese profesional quien conoce la realidad médica del paciente y puede indicar con mayor certeza los tratamientos y elementos que se requieren para atender los padecimientos de salud"

La Sentencia T- 121 de 2007, sostuvo:

"(...) En esa medida, el tratamiento médico que se le brinde a los usuarios del servicio de salud no puede limitarse a la atención de urgencias, o al diagnóstico de un médico tratante sin que este se complemente con el suministro de los medicamentos que integran el tratamiento y la realización de terapias de rehabilitación requeridas para una plena u óptima recuperación. (...)"

Así mismo y en desarrollo del *principio de integralidad* la Corte Constitucional ha determinado que es deber del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante. Específicamente ha señalado esta Corte que:

"(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos en la ley."

Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio.

En ese orden, la presente acción de tutela está llamada a prosperar no sólo ante circunstancias graves que puedan comprometer la existencia biológica de una persona, sino frente a eventos que, no obstante ser de menor gravedad, perturben el núcleo esencial del derecho a la vida y tengan la posibilidad de desvirtuar claramente la vida y la calidad de la misma en las personas, según cada caso específico.

Es claro que el señor JAIME OCAMPO QUIROGA en virtud de las patologías que padece, requiere de la prestación de un tratamiento en salud de manera integral, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección por ser un adulto mayor.

Por ende, se puede corroborar que efectivamente le prescribieron el servicio CONSULTA PRE ANESTESIA PAQUETE DE CIRUGIA, requerida de manera urgente para tratar las diversas patologías que padece y que no le ha sido autorizada ni programada por la EPS con la justificación de que no cuentan con agenda disponible y que requieren de más tiempo para gestionarla. Postura no aceptada por parte de este Despacho, pues en primer término es su responsabilidad garantizar la completa prestación de los servicios en salud que dispensen sus afiliados y no ponerle trabas administrativas a los usuarios, las cuales son única y exclusiva responsabilidad de la EPS y por otro lado, como ya se anotará en los anexos de la presente acción se puede evidenciar la orden médica proferida por

los galenos tratantes, quienes son las personas idóneas para definir qué servicios, medicamentos, procedimientos, insumos, suministros, necesita el paciente para aliviar las enfermedades que lo aquejan, los cuales resultan indispensables para la protección del derecho a la vida y cuya demora es violatoria de los derechos fundamentales, dado que puede ocasionarle grave deterioro en su integridad física y personal.

Es de anotar que si bien es cierto, la EPS FAMISANAR indica que ya procedieron a desplegar las acciones pertinentes, es evidente que el servicio ni ha sido autorizado ni mucho menos realizado, y tales actuaciones fueron posibles posterior al conocimiento de la presente acción, por lo tanto dado que su demora puede repercutir de manera negativa en la salud del accionante, se ordenará a la EPS accionada acatar la garantía reforzada de atención integral oportuna por tratarse de un paciente de especial protección por ser un adulto mayor.

Por lo cual debe accederse a la protección invocada, ordenándole a FAMISANAR EPS que proceda de manera inmediata a autorizar, agendar y realizar el servicio CONSULTA PRE ANESTESIA PAQUETE DE CIRUGIA, que le ha sido prescrito al accionante, y conforme las órdenes indicadas por el médico tratante, atención que será brindada por cualquier IPS que cuente con las características pertinentes y que haga parte de la red adscrita a la EPS, con el fin de brindarle una mejor calidad de vida.

En el mismo sentido, se ordenará a la EPS accionada que le brinde todos los tratamientos y/o procedimientos que requiera el usuario para tratar las patologías que padece, atendiendo el principio de oportunidad y conforme las órdenes dadas por los médicos tratantes.

Por lo expuesto, el JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. TUTELAR el derecho a la salud del señor JAIME OCAMPO QUIROGA, por las consideraciones expuestas en este fallo.

SEGUNDO. ORDENAR en consecuencia, al Representante Legal de FAMISANAR EPS que a más tardar en el término de **DOS (2)** días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, proceda de manera inmediata a autorizar, agendar y realizar el servicio CONSULTA PRE ANESTESIA PAQUETE DE CIRUGIA, que le ha sido prescrito al accionante y conforme las órdenes del médico tratante, para tratar las patologías que padece, atención que será brindada por cualquier IPS que cuente con las características pertinentes y que haga parte de la red adscrita a la EPS, con el fin de brindarle una mejor calidad de vida. Igualmente, la EPS deberá prestarle el TRATAMIENTO INTEGRAL que requiera para el tratamiento de las patologías que padece, atendiendo el principio de oportunidad y conforme las órdenes dadas por los médicos tratantes, por tratarse de un sujeto de especial protección por ser un adulto mayor.

TERCERO. Contra la presente decisión procederá la impugnación por la vía jerárquica dentro de los tres (3) días

siguientes al de su notificación. (Art.31 ibídem). **RELIEVASE** que la impugnación del fallo no suspende el cumplimiento de la presente determinación.

CUARTO. Si la presente providencia no es impugnada, teniendo en cuenta el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO. Notifíquese a los interesados por el medio más expedito.

SEXTO. De igual manera, proceda la secretaria a incluir la presente providencia en el Portal Web de la Rama Judicial - Estados Electrónicos.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FRANCISCO ÁLVAREZ CORTÉS
Juez

Se les hace saber a las partes, que por la coyuntura de emergencia y para efecto del pleno ejercicio del debido proceso, en caso se querer impugnar la anterior decisión, la misma deberá ser enviada al correo institucional del juzgado (cmpl12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)